

perspectiva **mundial**

UNA REVISTA SOCIALISTA QUE DEFIENDE
LOS INTERESES DEL PUEBLO TRABAJADOR

**Edición
especial**

Asalto de la migra en Miami: golpe a la clase obrera

En defensa de la revolución cubana, en defensa de la clase trabajadora

Desde aquel día en noviembre pasado cuando Elián González, entonces de cinco años de edad, fue rescatado de las aguas de Florida, *Perspectiva Mundial* ha hecho campaña contra la negativa de la administración Clinton de devolverlo inmediatamente a Cuba.

Hemos señalado que él es uno de los muchos miles de víctimas de la política que el gobierno norteamericano ha

mantenido por varias décadas, codificada en la Ley de Ajuste Cubano de 1966. Esta política pretende atraer a cubanos al peligroso Estrecho de Florida en balsas y botes precarios con el conocimiento de que, si sobreviven, recibirán —a diferencia de otros inmigrantes— una bienvenida con ayuda y documentos de residencia permanente en la mentada “tierra

SIGUE EN LA PAGINA 2

EDITORIAL

PUERTO RICO

¡EE.UU. fuera de Vieques!

Urgen protestas públicas ahora contra el envío de una fuerza invasora norteamericana a la isla puertorriqueña de Vieques con cientos de agentes del FBI y alguaciles respaldados por 1 200 marines. El objetivo de esta invasión es de desalojar a los manifestantes acampados en Vieques y permitir que la Marina de Guerra reanude sus prácticas de bombardeo para las guerras

SIGUE EN LA CONTRAPORTADA



ESTADOS UNIDOS

Consigna de tropas para asegurar derechos civiles: un mundo aparte del ataque en Miami

—pág. 6

Asalto de la migra en Miami: un golpe contra la clase obrera

En defensa de la revolución cubana, en defensa de la clase trabajadora

VIENE DE LA PORTADA

de la abundancia”, la potencia capitalista más rica del mundo.

Es más, *Perspectiva Mundial* ha insistido en que los altos funcionarios del gobierno norteamericano, mostrando una brutal indiferencia hacia las consecuencias que todo esto tendría para un niño inocente, pronto descubrieron cómo aprovechar para su beneficio los sucesos no anticipados en torno a este caso. Elián González podía ser utilizado para ayudarle a la clase dominante estadounidense a limpiar la imagen empañada de la “migra” —su fuerza policiaca nacional más grande y más odiada— y para reforzar los poderes ejecutivos del estado imperialista. Estos son objetivos estratégicos que representan grandes prioridades para los gobernantes norteamericanos, conforme preparan su arsenal para usarlo contra el pueblo trabajador tanto en Estados Unidos como en el exterior.

El operativo que las fuerzas especiales del Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) efectuaron, a estilo de comando, en las tempranas horas del 22 de abril ofrece una nueva y notable confirmación de la evaluación hecha por *Perspectiva Mundial*. Esta redada asestó un golpe tremendo al derecho de todo residente de Estados Unidos de tener “seguridad en su persona, su hogar, sus documentos y efectos personales contra registros e incautaciones irrazonables”, según lo estipula la Cuarta Enmienda a la Constitución de Estados Unidos, la parte de la Carta de Derechos que codifica el espacio democrático que el pueblo trabajador conquistó a través de más de dos siglos de lucha. Todo trabajador con conciencia de clase tiene la obligación de tomar una posición inequívoca en contra de esa acción policiaca, que, además de todo lo demás, se vio acompañada de chovinismo y prejuicios antiinmigrantes contra la población catalogada como “los cubanos de Miami”.

Es por eso que *Perspectiva Mundial*, que afirma con orgullo en su membrete que “de-

fiende los intereses del pueblo trabajador”, está haciendo campaña ahora con el titular “Asalto de la migra en Miami: golpe a la clase obrera”. A aquellos que por más de 40 años han sido los defensores más consecuentes e intransigentes de la Revolución Cubana, Les incumbe aún más condenar la redada.



Policías con equipo antimotines y vehículo blindado desalojan a pobladores en Nueva York en 1996.

Después de meses de publicidad sin precedentes, la acción policiaca en Miami sacó a un niño cubano del hogar de parientes que, careciendo de derechos legales de custodia, estaban ostentándolo ante el mundo como trofeo de la contrarrevolución. Por esa razón, un sector de los activistas en el movimiento de solidaridad con Cuba están aplaudiendo el operativo como una “victoria” por la cual se debe mandar ramos de flores y cartas de felicitación a la fiscal general Janet Reno, policía número uno de Estados Unidos, y al presidente norteamericano William Clinton.

No puede haber nada más peligrosamente falso. Lo que está en juego es una perspectiva obrera en defensa de los derechos democráticos y del espacio político conquistado por el pueblo trabajador en Estados Unidos a través de dos revoluciones y un sinnúmero de batallas sangrientas en las calles. Es por este camino que también se defenderá

efectivamente a la Revolución Cubana, la primera dictadura del proletariado en nuestro hemisferio.

Jamás ha habido más necesidad de claridad sobre el hecho de que el gobierno de la potencia imperialista más peligrosa y brutal del mundo no actúa a favor de «nosotros». “Nosotros” y “ellos” son dos clases irreconciliables.

Clinton refuerza poderes policiacos

Desde que asumió la presidencia hace más de siete años, la administración Clinton, con apoyo bipartidista en el Congreso, se ha dedicado a reforzar sistemáticamente los poderes policiacos y al mismo tiempo a restringir el espacio político para el ejercicio de los derechos democráticos. Esto representa la necesidad considerada de los gobernantes, una anticipación frente a la polarización política que va paulatinamente en ascenso y a la resistencia intensificada por parte de sectores cada vez más amplios de trabajadores y agricultores contra sus condiciones

de explotación y opresión. Las siguientes son apenas algunas de las medidas que han tomado la Casa Blanca, el Congreso y las cortes:

- Bajo el lema de “combatir las drogas”, la Ley Anticrimen de 1994 promulgada por Clinton atenta contra las garantías de la Cuarta Enmienda de la Constitución en contra de los registros e incautaciones ilegales en hogares particulares, y los tribunales han eliminado prácticamente tales derechos en los automóviles.

- Tras la promulgación de la Ley de Control y Responsabilidad de Inmigración en 1996, iniciada por la Casa Blanca, las deportaciones alcanzaron un récord en los dos años siguientes. Se han ampliado los odiados poderes de la migra para detener y deportar a personas sospechosas de ser “extranjeros ilegales” sin que tengan derecho a la revisión o apelación judicial.

- La Ley sobre el Antiterrorismo y la Pena

de Muerte Eficaz, promulgada por Clinton en 1996, permite que el SIN encarcele a los inmigrantes usando lo que denomina “pruebas secretas”. También amplía los poderes del gobierno para recurrir a las intercepciones electrónicas y a detener a individuos sin fianza bajo “detención preventiva”.

- El actual número de personas encarceladas es ocho veces más que en 1971, y casi dos veces más que cuando el Gran Carcelero ocupó la Casa Blanca en 1992.

- Se ha restringido aún más los derechos a la apelación y a la libertad bajo palabra, al tiempo que se han vuelto más normales las “sentencias mínimas obligatorias”, condenas más largas y hasta el trabajo de presos para el “mercado libre”.

- Durante los siete años de la administración del Gran Verdugo, se ha triplicado el número anual de personas electrocutadas, ahorcadas y ejecutadas por inyección letal, al mismo tiempo que se ha triplicado el número de personas acusadas de cargos capitales federales desde que se adoptó en 1994 la Ley Federal de Pena de Muerte, iniciada por Clinton.

- La Casa Blanca ha acelerado el proceso de dotar a las fuerzas policíacas de armas y equipos más pesados y mortíferos. Sólo entre 1995 y 1997, la administración Clinton dio a los departamentos de policía unos 1.2 millones de piezas de equipo militar, incluso 73 lanzadores de granadas y 112 vehículos blindados. Se ha fomentado y ampliado el uso de revólveres de autorepetición con cargadores grandes.

- En nombre de prevenir los ataques “terroristas”, el Pentágono de Clinton ha establecido, por primera vez en la historia de Estados Unidos, un “comando para la defensa de la patria”, preparando el camino para que las fuerzas armadas norteamericanas realicen abiertamente operaciones policíacas —actualmente prohibidas— contra los residentes de Estados Unidos.

Puño de acero y arrogancia imperial

La aprobación oficial de la administración Clinton a la escalada de violencia policíaca ha llevado, de una punta del país a la otra, a una mayor frecuencia de asesinatos policíacos a sangre fría. La lista de nombres que han provocado estallidos de ira y reclamos de justicia, sólo en los últimos meses, es larga y muy conocida: Amadou Diallo y Patrick Dorismond en Nueva York; Willie James Williams en Valdosta, Georgia; Tyisha Miller en Riverside, California; y muchos más. Pero debemos recordar que esta tendencia de violencia po-

liciaca nacional no ocurre de forma aislada. La acompaña estrechamente la agudización de los conflictos interimperialistas y de la agresión militar norteamericana por todo el mundo, de Iraq a Yugoslavia, Sudán y Corea.

Ellos hacen en este país lo que hacen en el extranjero. La política exterior es siempre, en última instancia, una expresión de la verdadera trayectoria de la política nacional. Su trayectoria y sus objetivos no tienen nada que ver con “el imperio de la ley”. Tienen que ver completamente con el puño de acero y la arrogancia imperial de “la nación indispensable” del mundo, según le gusta a William Clinton calificar a Estados Unidos.

La redada del SIN en Miami, según ha señalado Laurence Tribe, profesor de derecho constitucional en Harvard y abogado del *establishment* liberal, se llevó a cabo en violación del hecho que, bajo la Constitución de Estados Unidos, “es indiscutible que el poder ejecutivo no goza de la autoridad unilateral para remover a la fuerza a individuos inocentes sin tomar el tiempo necesario para buscar una orden de un juez o magistrado”. Ningún juez o magistrado “había emitido el tipo de orden u otra autoridad necesaria para que el poder ejecutivo allanara la casa para agarrar al niño”.

El SIN, con sus poderes ampliados bajo la ley de inmigración de 1996, puede obtener órdenes judiciales para entrar a lugares de trabajo en busca de trabajadores indocumentados y “registrar, interrogar y arrestar a individuos sin orden judicial para impedir entradas ilegales al país”, agrega Tribe. “Pero nadie sospecha que Elián esté aquí ilegalmente”. (Al contrario, añadiríamos que la Ley de Ajuste Cubano de los gobernantes estadounidenses está diseñada para atraer al máximo número de “Elianes”, todos ellos “legales”).

La justificación que dio la migra para su despliegue de fuerza en Miami fue el muy conocido alegato de “informes de inteligencia” sobre armas en la casa o entre la multitud. (¿Cuántas veces los trabajadores en Estados Unidos hemos sido víctimas de la “inteligencia secreta”, ofrecida por el FBI y otras agencias policíacas, soplones y provocadores para justificar actos asesinos?)

La hora temprana escogida para la redada, una hora que está prohibida en la mayoría de las órdenes de registro; la forma en que derribaron con arietes las puertas delantera y trasera; la negativa a buscar u obtener una orden judicial que obligara a la familia a entregar al niño (los arquitectos en el SIN del “dilema” alegan que sus poderes no están sujetos a revisión judicial);

los “daños colaterales” desmedidos que desataron contra el hogar de los parientes del niño, a quienes la administración había “otorgado” la custodia al principio; los gases lacrimógenos que le echaron a la multitud enfrente de la casa; el asalto al equipo de camarógrafos de la NBC: todos son elementos de la violación del derecho constitucional a la seguridad en nuestro propio hogar que los residentes de Estados Unidos consideran una de las más preciadas garantías bajo la Carta de Derechos. Todos estos elementos iban dirigidos a dar un escarmiento de clase sobre lo que realmente significa “el imperio de la ley” a los que osen resistir el avance de la fuerza imperial de la cual William Clinton y Janet Reno son servidores.

Como si fuese necesario enfatizar el mensaje, dos días después de la redada de la migra en Miami, la prensa en Nueva York informó que policías “en uniforme de combate —apoyados por sabuesos, helicópteros y francotiradores en los techos— bloquearon las calles” durante varias horas en el barrio Edgemere de Queens. Estaban “siguiendo una pista” de que un hombre, buscado en relación a una serie de tiroteos, estaba en un apartamento en ese vecindario. Nunca lo hallaron, pero otras personas en el barrio fueron detenidas, manoseadas e interrogadas. ¿Captan el mensaje?

Próximo blanco de ataque: Puerto Rico

Inmediatamente después de la redada en Miami, el gobierno norteamericano anunció que pronto iniciarían operaciones con alguaciles y otras agencias policíacas federales para desalojar de la isla puertorriqueña de Vieques a los manifestantes que se han acampado allí permanentemente para impedir que el Pentágono reanude el uso de la isla como campo de pruebas de sus armamentos.

Uno de los aspectos más nocivos de estos sucesos es el prejuicio chovinista, anticubano, antiinmigrante y antiobrero que se ha utilizado para lograr apoyo al operativo policíaco de comando en Miami. El alto nivel de apoyo a la redada que existe entre afroamericanos sondeados en el sur de Florida es un indicio del éxito del intento de aprovechar —con fines reaccionarios— las muchas décadas de resentimiento contra mucha gente en la comunidad cubana.

La pluma de Thomas Friedman, principal columnista del *New York Times*, chorea veneno al referir al papel pérfido de los “cubanos de Miami” como si fueran un bloque monolítico, sin diferenciaciones de clase u otra distinción, excepto al identi-

car a algunos de ellos como “extremistas”. Como pueblo, supuestamente comparten una culpabilidad colectiva. Ya sean residentes o ciudadanos, tienen menos derechos que los “americanos”.

Tras la redada que apoyó con entusiasmo, Friedman declara satisfecho que espe-

ra que los “cubanos de Miami” ahora recuerden “que no viven en su propio país privado, que no pueden hacer lo que se les dé la gana, y que puede ser que odien a Fidel Castro más de lo que aman la Constitución norteamericana, pero eso no sucede con el resto de nosotros”. Esto lo dice un

partidario casi histérico de la desvirtuación de la Carta de Derechos a perjuicio *de todos nosotros*, para escarmentar a los “cubanos de Miami”.

El uso de la expresión “gusanos” o “la mafia de Miami” (casi más poderosa que el estado imperialista) para referirse de manera generalizada a los cubanoamericanos residentes en Miami —referencias que a veces hasta surgen entre partidarios de la Revolución Cubana en Estados Unidos— tiene el mismo carácter reaccionario y pequeño-burgués. Los sucesos en torno al caso de Elián González confirman lo que ha planteado *Perspectiva Mundial* por mucho tiempo: cada año que pasa, los cubanos y cubanoamericanos que viven en Estados Unidos se ven caracterizados cada vez más por las mismas divisiones de clases y polarización política que otros residentes. Las capas burguesas cubanas que dominan el aparato político del condado Dade están más integradas —y no menos— a sus hermanos y hermanas de clase a nivel nacional. El papel que desempeñaron varios de ellos en las “negociaciones” durante todo el caso de Elián son prueba de esto.

Asimismo, los trabajadores cubanos en Estados Unidos están integrados de manera más homogénea al resto de su clase.

Fin de una época

Cabe destacar el tamaño relativamente pequeño y la edad promedio relativamente elevada de la multitud que vigilaba las calles alrededor de la casa de los González en la Pequeña Habana. La ausencia casi completa de las organizaciones contrarrevolucionarias armadas que en años anteriores hubieran proporcionado cuadros y desempeñado un papel influyente en sucesos como los de los últimos cinco meses confirma aún más que el caso de Elián González será reconocido como el fin de una época de esperanzas reaccionarias de influenciar la política norteamericana.

No obstante los publicistas imperialistas como Thomas Friedman, no son los cubanos de “línea dura” los que han “secuestrado la política norteamericana sobre Cuba durante todos estos años” y que ahora deben ser escarmentados por los “verdaderos” norteamericanos, a nombre de quien él habla. El espacio político disfrutado por muchos años por fuerzas tales como la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) se derivó del hecho que ellos cumplieran los intereses y la política defendida por Washington. Incluso la típica imagen chovinista de los cubanos como extremistas que están fuera de control ha sido útil para

Cartas al director

[A continuación publicamos cartas, a las cuales se refieren el editorial principal y el artículo de Steve Clark, que fueron enviadas al semanario socialista en inglés *The Militant*, publicación hermana de *Perspectiva Mundial*. La traducción es de *Perspectiva Mundial*.]

Resultado de asalto del SIN: un avance

El largo cautiverio de Elián González en Miami, y el hecho de negarle la custodia a Juan Miguel González, con la orgía de la prensa que lo ha acompañado, ha sido una afrenta internacional. El hecho que el 22 de abril fue arrebatado de las garras de los derechistas y parientes lejanos en Miami fue un avance para los derechos del pueblo trabajador.

El artículo del 24 de abril del *Militant* sobre el caso me resultó poco claro y hasta contradictorio. El artículo empieza diciendo que el *Militant* “apoya de lleno” el retorno de Elián González a su padre y a Cuba. Pero después parece echarse atrás o hasta argumentar en contra de toda acción que lo lleve a cabo, afirmando, “En el contexto de los esfuerzos de los gobernantes para reforzar los poderes del SIN y socavar los derechos de apelación judicial, es peligroso abogar a favor del ‘simple retorno administrativo’ del niño”.

Las “apelaciones judiciales” para quitar a Elián de su padre consisten del falso reclamo de que él es un refugiado político que huye de la persecución por el gobierno cubano y que solicita asilo político en Estados Unidos. No es cierto. La petición de asilo la están entablando grupos derechistas y parientes lejanos, quienes no tienen ningún derecho de hablar a nombre suyo. Las cortes de apelaciones norteamericanas no tienen derecho a juzgar si personas en Cuba tienen o no el derecho a tener hijos.

El artículo asevera que Clinton pretende usar el caso para “limpiar la imagen del SIN”. Dudo que la escena de un

gobierno que acepta verbalmente la idea de que el padre de Elián debe tener la custodia, al mismo tiempo que no hace nada por cuatro meses para hacerlo realidad, haya sido una imagen bonita a los ojos de la gran mayoría de la gente en Estados Unidos que rechaza la campaña anticubana para mantener a Elián en cautiverio en Miami.

Yo compararía la remoción de Elián por la policía federal con el uso de tropas norteamericanas para hacer valer la supresión de la segregación racial en el Sur en los años 50 y 60, cosa que los socialistas apoyaron firmemente.

Joe Callahan
Minneapolis, Minnesota

Acción del SIN: hecho positivo

La remoción de Elián González de la casa en Miami es un hecho positivo. No debemos enredarnos en el debate de si se empleó demasiada fuerza.

El próximo problema es cuál debe ser nuestra posición sobre la prohibición, impuesta por la Undécima Corte del Circuito de Apelaciones en Atlanta, que le prohíbe a Elián González “partir o tratar de partir de Estados Unidos”.

El SIN es una agencia policiaca. Hay otras. Al profundizarse la crisis descubriremos que vamos a enfrentar una policía aún más brutal y odiada. Su papel se vuelve cada vez más claro.

Sin embargo, hasta que la clase trabajadora detente el poder estatal, descubriremos que tendremos que pedirle al estado que haga valer algunas de sus leyes. Lo hemos hecho anteriormente y lo haremos en el futuro. Pensar de otra manera huele a ultraizquierdismo y anarquismo. En este momento debemos exponer y denunciar todos los intentos de impedir que Elián y su familia regresen a Cuba cuando ellos lo deseen.

Les Slater
Brookline, Massachusetts

los gobernantes estadounidenses y la continúan jugando a su favor. Sin embargo, a medida que disminuyó la ventaja política de mantener a Elián González en Estados Unidos —según la óptica de Washington— quedó expuesta la realidad de la supuesta influencia de la FNCA.

A partir del momento en que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba tomaron acción decisiva en febrero de 1996 contra el vuelo abortado de Hermanos al Rescate, y culminando con el fracaso frustrante de la campaña para “mantener a Elián González en el ‘mundo libre’”, se ha desmoronado toda pretensión de que existe una organización cubanoamericana políticamente homogénea —ni hablar de un grupo armado— que tenga suficiente peso como para influir considerablemente en la política de Washington hacia Cuba. Ha perdido credibilidad el mito de una comunidad cubana monolítica, sin divisiones de clases, mantenida a raya por poderosos cuadros derechistas, apoyada y complacida por Washington. Ha quedado aún más debilitada la idea conveniente de que Miami no se rige por las mismas leyes de la lucha de clases que el resto de Estados Unidos.

Las cuestiones en torno a la redada del SIN en Miami son de importancia vital al movimiento obrero. Millones de trabajadores se sienten indignados al ver cómo los gobernantes pisotean nuestros derechos más fundamentales, nuestro espacio político, nuestro sustento, hasta nuestro propio bienestar físico. La carga regresiva de la política de impuestos de la burguesía; la inevitabilidad de que los bancos y agencias estatales sometan a ventas hipotecarias a los pequeños agricultores estrujados por el creciente peso de los monopolios gigantes; la indiferencia brutal hacia la vida humana simbolizada por el mortífero asalto policial contra el recinto de los davidianos en Waco, Texas: si la única voz que el pueblo trabajador y las capas medias más empobrecidas oyen pronunciarse en contra de dichas indignidades son las voces de la reacción, si no se oye una voz obrera indignada y resuelta que muestre una camino de lucha de clases hacia el futuro, entonces el canto de sirena radical de los demagogos fascistas encontrará un oído aún más receptivo.

Nuestra batalla por el regreso de Elián González a Cuba aún no ha terminado. Se-

ría inútil predecir cuánto más tardará. Pero cada día que pasa se hace más evidente que la clase gobernante norteamericana en su mayoría se ha convencido de que se han extinguido las ventajas que pueda derivar al impedir que el niño regrese a casa. Se ha agotado el valor de uso del niño para los gobernantes. El “presidente caritativo” está pasando a ocuparse de otras cosas.

El pueblo de Cuba ha ganado.

Las masivas movilizaciones de cubanos, día tras día, mes tras mes; su decisión de impedir que el imperialismo prepotente del norte se robe a un niño; la atención pública de todo el mundo: eso fue lo que fi-

partimos el dulce sabor de la victoria con nuestros hermanos y hermanas de combate en Cuba, los comunistas y los trabajadores con conciencia de clase en Estados Unidos debemos mantenernos claros e intransigentes acerca de las cuestiones políticas de clase que están en juego: el carácter imperialista del gobierno norteamericano y sus agencias armadas. Depende de ello nuestro futuro: de hecho, el futuro del mundo.

El pensamiento confuso —en el mejor de los casos— al encarar estas cuestiones de clase dentro de lo que se conoce comúnmente como el movimiento de solidaridad con Cuba es un peligro mortal, incluso para la propia Revolución Cubana. Cada paso que dé la clase gobernante norteamericana para restringir el espacio político para el pueblo trabajador en Estados Unidos —de limitar el ejercicio de los derechos democráticos que se arrancaron temporalmente gracias a luchas cruentas— representa al mismo tiempo un golpe contra la Revolución Cubana.

Cuando la victoriosa Revolución de Octubre se vio obligada —por la correlación de fuerzas desfavorable en el mundo en 1918— a firmar el rapaz Tratado de Brest-Litovsk con el imperialismo alemán para comprar un respiro de tiempo y salvar el poder estatal de los trabajadores y campesinos —un periodo muy especial en la joven república soviética— V.I. Lenin dirigió la lucha en el seno de la dirección bolchevique para tomar ese paso necesario. Algunos diputados parlamentarios en Alemania que se denominaban socialistas votaron a favor de ratificar este mismo tratado en el *Reichstag* alemán, argumentando que no había motivo para no hacerlo ya que los propios bolcheviques habían suscrito las condiciones onerosas de este tratado.

La inolvidable respuesta de los bolcheviques —según la documentó León Trotsky, organizador del Ejército Rojo y principal negociador de Lenin en Brest-Litovsk— fue la siguiente: “Qué canallas. Nosotros nos vemos obligados objetivamente a negociar para no ser aniquilados, pero ustedes... tienen la libertad política de votar a favor o en contra, y su voto implica si depositan o no su confianza en su propia burguesía”.

Hoy día, para el movimiento obrero en Estados Unidos, están en juego los mismos principios de clase. ■



Policia en Los Angeles efectúa ‘redada contra pandillas’ en 1994, deteniendo a jóvenes a punta de fusil.

nalmente impidió que el gobierno norteamericano barriera bajo la alfombra este asunto cada vez más bochornoso (su propio engendro desde el principio). “Perduraremos un día más” —el grito de batalla de trabajadores y agricultores en todas partes— es la bandera bajo la cual marchó el pueblo cubano.

El delito imperdonable de Cuba

Como ha sucedido muchas veces antes durante los últimos 40 años, los gobernantes norteamericanos están debatiendo entre sí cómo seguir castigando al pueblo trabajador de Cuba por la afrenta imperdonable de haber creado el primer territorio libre de América. Las familias propietarias se encuentran divididas, como siempre, sobre cómo impulsar su objetivo de derrocar el poder estatal revolucionario a las puertas del imperialismo norteamericano. No hay tregua, ni siquiera por un día. Pero al trazar una línea en la arena, el pueblo de Cuba les ha mostrado a los gobernantes norteamericanos que ellos han juzgado mal este momento en la historia. Y no es la primera vez.

Sin embargo, al mismo tiempo que com-

Consigna de tropas para asegurar derechos civiles: un mundo aparte del ataque en Miami

POR STEVE CLARK

Este artículo apareció primero en la edición del 8 de mayo del semanario socialista en inglés *The Militant*.

“No debemos enredarnos en el debate de si se empleó demasiada fuerza”, escribe Les Slater en una de cartas publicadas en la edición de esta semana del *Militant*. El se refiere a la redada en Miami, al estilo de SWAT (unidades especiales policíacas) el 22 de abril, en la que 8 de los 130 miembros de un grupo de fuerzas especiales de la Patrulla Fronteriza del Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) —con equipo antimotines y ametralladoras MP-5— tumbaron la puerta delantera con un ariete e irrumpieron en una casa particular.

En una carta en la misma edición del *Militant*, Joe Callahan también aplaude el asalto de la migra, comparándolo con “el uso de tropas norteamericanas para hacer valer la supresión de la segregación racial en el Sur en los años 50 y 60, cosa que los socialistas apoyaron firmemente”.

El editorial del *Militant* “En defensa de la revolución cubana, en defensa de la clase trabajadora”, destacado en la primera plana, presenta la perspectiva comunista sobre el asalto brutal e inconstitucional del SIN en Miami. Sin embargo, se precisa además una respuesta explícita a la interpretación falsa que da en su carta Joe Callahan sobre la trayectoria política del Partido Socialista de los Trabajadores como parte de la lucha contra el sistema de segregación racial *Jim Crow* y a favor de los derechos civiles de los negros.

Ese movimiento proletario de masas se extendió no sólo por el Sur sino por todo Estados Unidos durante más de una década. Estaba arraigado en las batallas que forjaron los sindicatos industriales en los años 30 y en las luchas de los aparceros y arrendatarios. Muchos de sus cuadros más abnegados obtuvieron sus primeras experiencias en las movilizaciones durante la Segunda Guerra Mundial contra las exclusiones raciales en las industrias bélicas y contra el terror de las turbas linchadoras y la violencia policial, así como la segregación institucional de unidades en las propias fuerzas armadas norteamericanas.



Universidad de Misisipí, 1962: ante movimiento de masas, Washington envió 23 mil tropas para proteger al estudiante negro James Meredith.

Después de la guerra, las brasas se encendieron de nuevo con las luchas victoriosas por la independencia colonial y la liberación nacional en África, Asia y América. Para 1954 estos cambios en el equilibrio de las fuerzas de clases a nivel internacional crearon las condiciones en las cuales la Corte Suprema falló, en el caso de *Brown contra la Junta de Educación*, que no quedaba más remedio que declarar que la segregación escolar estaba en contra de la Constitución de Estados Unidos.

Durante la década siguiente, una verdadera guerra social se libró por el Sur norteamericano. Las fuerzas segregacionistas usaron tanto la fuerza policíaca oficial como el terror de las turbas linchadoras para negarles a los negros el derecho al voto y el acceso igual a las escuelas, al transporte, a los restaurantes y hoteles, y a toda tipo de facilidades públicas. Los negros combatieron la violencia racista, en muchos casos al organizar la autodefensa armada, y buscaron partidarios de todos los colores de piel en todo Estados Unidos para movilizarse en “viajes de la libertad”, sentadas, marchas, mítines y protestas de masas.

Tropas federales, autodefensa armada

Los gobernadores pro supremacía blanca, tales como Orval Faubus de Arkansas, Ross Barnett de Misisipí, George Wallace de Alabama, al principio movilizaron a la Guardia Nacional en sus estados para im-

pedir medidas que acabaran con la segregación en las escuelas primarias y secundarias y las universidades con el ingreso de estudiantes negros, y para mantener la desigualdad institucionalizada en todos los aspectos de la vida y del trabajo. En respuesta, trabajadores y jóvenes negros, no sólo en el Sur sino en todo el país, exigieron que Washington *hiciera valer* la igualdad de derechos que ahora proclamaba ante la opinión pública mundial: incluso, de ser necesario, al federalizar la Guardia Nacional o enviar al ejército norteamericano.

El movimiento comunista en Estados Unidos comenzó a reivindicar esta demanda a partir de 1955. “¿Cuántos linchamientos, golpizas, flagelaciones y secuestros tenemos que aguantar hasta que el gobierno federal tome acción para proteger al pueblo negro de Misisipí?” declaraba el *Militant* al principio de un editorial publicado en octubre de ese año. Apenas unos días antes, los linchadores del joven negro Emmett Till habían sido declarados inocentes en un pueblo del sur de Misisipí, gracias al contubernio del juez, del jurado y del fiscal, todos de raza blanca.

En un debate de la dirección del Partido Socialista de los Trabajadores al año siguiente, el secretario nacional Farrell Dobbs informó que en un viaje reciente a Chicago había descubierto “una enorme receptividad a la demanda de tropas federales” entre los trabajadores negros que había conocido en

las industrias de la carne y de maquinaria agropecuaria. Agregó que “ésta es una gran demanda que debe ser reivindicada con la acción de masas. Para mostrar la seriedad de su posición, los dirigentes negros deberían organizar una marcha en Washington. Esta perspectiva... le daría más peso a toda la lucha del pueblo negro”.

Dobbs señaló “las pruebas acumuladas de que el propio pueblo negro ha mostrado iniciativa al orientarse hacia la autodefensa”, y que la defensa contra las fuerzas reaccionarias es “un problema que enfrentan los sindicalistas, tanto negros como blancos, así como los negros como pueblo.

“Pienso que el lema a favor de las tropas”, dijo Dobbs, “ayudará a impulsar la consigna de la guardia defensiva como aspecto de propaganda. La negativa del gobierno de proteger al pueblo negro contra el terror conduce a la conclusión de que deben buscar cómo defenderse de la mejor forma posible, o sea, guardias defensivos organizados junto con sus aliados blancos”.

En esta época, tanto la administración republicana de Dwight Eisenhower como las administraciones demócratas de John Kennedy y Lyndon Johnson opusieron resistencia, a cada paso del camino, al envío de tropas para hacer valer los derechos de los negros. Pero el creciente movimiento de masas, que exigía que Washington tomara acción contra el baluarte cada vez más debilitado pero aún violentamente segregacionista en el Sur, obligó a la Casa Blanca a enviar alguaciles federales y unidades militares en distintas coyunturas decisivas.

Cuando abrieron las escuelas en el otoño de 1962, por ejemplo, el gobernador Barnett de Misisipí desplegó a policías estatales y *sheriffs* locales para rechazar tres esfuerzos consecutivos de aplicar una orden federal para admitir a un joven negro llamado James Meredith a la Universidad de Misisipí en Oxford. Al final, el 2 de octubre, la administración Kennedy acordó enviar las fuerzas necesarias para asegurar que Meredith se inscribiera y pudiera ingresar al recinto. Acompañado de tropas federales, el estudiante negro fue recibido por una turba racista. Algunos gritaban “¡Váyanse a Cuba, amantes de negros!” y tiraron piedras. Al concluir el día, los matones segregacionistas habían herido a 160 alguaciles federales y matado a un trabajador local y un reportero británico. En las semanas posteriores, 23 mil tropas norteamericanas del ejército, los marines y las Fuerzas Aéreas fueron estacionadas en el recinto universitario.

En marzo de 1965, cuando las manifestaciones de masas por los derechos civiles en

Selma, Alabama, estaban llamando la atención pública a la negativa de las autoridades estatales de garantizar los derechos del voto a los negros, el *Militant* exigió que el gobierno federal enviara tropas a Alabama para arrestar a Wallace “y a todas las otras autoridades estatales y locales culpables de negarles a los negros sus derechos. Además, el gobierno federal debe armar y delegarles autoridad policial a negros de Alabama para que ellos puedan proteger sus propias comunidades de la violencia racista”.

Cuando miles de luchadores por los derechos civiles rehusaron dar vuelta ante un sangriento asalto por las tropas estatales en su primer intento de marchar de Selma a Montgomery, la administración Johnson se vio forzada dos semanas después no sólo a convocar a la Guardia Nacional de Alabama para el servicio federal a fin de garantizar la seguridad de los que marchaban, sino a presentar un proyecto de ley que llegó a ser la Ley sobre los Derechos de Votación de 1965.

Logros sociales y democráticos

En la última mitad de los años 60, el movimiento de masas por los derechos civiles había anunciado el fin del sistema de segregación y discriminación sancionada por el estado que existía por todo el Sur de Estados Unidos, conocido como *Jim Crow*.

No sólo se habían promulgado leyes federales por los derechos civiles en las que se codificaba la igualdad, sino que se había logrado una importante ampliación de las garantías del seguro social para todos los trabajadores: Medicare, Medicaid, cupones de alimentos, y aumentos por el costo de vida. Estas fueron las primeras nuevas conquistas importantes para el salario social del pueblo trabajador desde las masivas batallas obreras de los años 30.

Estas victorias dieron un impulso vital a las luchas contra la opresión nacional de los chicanos, puertorriqueños y otras capas oprimidas de la población. Dieron un ejemplo poderoso al movimiento por los derechos de la mujer que había estallado a fines de los años 60, y le dieron ímpetu al naciente movimiento para detener la guerra imperialista norteamericana contra el pueblo de Vietnam. La clase obrera y los sindicatos en Estados Unidos se habían visto fortalecidos considerablemente.

Por otra parte, el uso de las tropas federales para hacer valer los derechos de los negros no había ayudado a los gobernantes capitalistas a justificar moralmente o a reforzar políticamente sus diversos aparatos de represión contra el pueblo trabajador, como está tratando Clinton de aprovechar

el ataque relámpago del SIN en Miami.

Al contrario, a medida que el movimiento por los derechos de los negros fue cobrando fuerza, ampliándose del Sur a todas las regiones del país, se produjo una expansión paralela de los derechos políticos y de las garantías constitucionales para todo el pueblo trabajador. En 1961 la Corte Suprema reforzó las protecciones de la Cuarta Enmienda contra “los registros y las incautaciones irrazonables”, incluida la prohibición de pruebas obtenidas ilegalmente por la policía. En 1964 se amplió el derecho de todos a tener un abogado, garantizado por la Sexta Enmienda. En 1966 se codificaron las protecciones de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación y las confesiones involuntarias, la llamada decisión “Miranda”. Y en 1972 se abolió la pena de muerte, un arma de clase bárbara de los patrones.

Desde que Estados Unidos y el capitalismo mundial entraron en una crisis a largo plazo a mediados de los años 70, cada una de estas conquistas se ha visto bajo creciente presión, y las cortes y los políticos de ambos partidos capitalistas han buscado erosionarlas o eliminarlas por completo. Los ataques más fuertes contra estos logros han sido impulsados por la administración Clinton, con apoyo bipartidista en el Congreso.

Así que es cierto que “el uso de tropas norteamericanas para hacer valer la supresión de la segregación racial en el Sur en los años 50 y 60 [es algo] que los socialistas apoyaron firmemente”. Sin embargo, al contrario de la afirmación de Joe Callahan, este capítulo orgulloso y cruento de la lucha del pueblo trabajador en Estados Unidos brinda pruebas convincentes de por qué el movimiento obrero y los oprimidos deben condenar intransigentemente el operativo comando antiobrero e inconstitucional que el poder ejecutivo del gobierno federal llevó a cabo en Miami. Esa redada durante el fin de semana de Pascuas forma parte del ataque frontal a los derechos constitucionales conquistados por una vanguardia de masas de la clase trabajadora en las batallas de los 50 y 60.

Todo trabajador con conciencia de clase no sólo debe “enredarse” en este debate, sino que debe ayudar a dirigirlo, y a *actuar* de acuerdo a sus conclusiones.

Los lectores que deseen aprender más sobre la política y la historia planteadas aquí pueden obtener el boletín titulado *From Mississippi to Boston: The Demand for Troops to Enforce Civil Rights* (De Misisipí a Boston: La demanda de tropas para asegurar los derechos civiles), que se puede comprar de la editorial Pathfinder. ■

¡EE.UU. fuera de Vieques!

VIENE DE LA PORTADA

de agresión norteamericanas en el mundo. También pretenden escarmentar a cualquiera que ose enfrentarse al poderío imperial estadounidense.

Esta arremetida contra el pueblo de Puerto Rico es el primer resultado de la redada brutal, a estilo de comando, que la administración Clinton lanzó en Miami unos días antes. La decisión final de lanzar el asalto a Vieques se tomó sólo después de que Washington efectuara la redada en Florida, con un creciente consenso en la clase gobernante norteamericana de que “tuvo éxito”. O sea, lograron obtener una amplia aceptación pública de este ataque y, al mismo tiempo, usarlo para socavar los derechos democráticos de todo el pueblo trabajador.

El mismo poder estatal y la misma acción —pero de mayor envergadura— ahora se dirige contra Vieques. Los gobernantes norteamericanos verán hasta dónde pueden llegar para asestarle un golpe a la lucha contra la ocupación de Vieques por la Marina de Guerra estadounidense y al movimiento independentista. Sin embargo, se toparán con resistencia y desencadenarán fuerzas no anticipadas.

Hace un año el 19 de abril, durante la guerra de Washington contra Yugoslavia, un avión de la Marina yanqui dejó caer “por error” una bomba de 500 libras que mató al viequense David Sanes. Esto detonó una lucha que ha movilizado a decenas de miles de trabajadores, estudiantes y otros en todo Puerto Rico y cada vez más en ciudades norteamericanas con comunidades puertorriqueñas.

La batalla por Vieques es parte del resurgimiento de la lucha anticolonial en Puerto Rico. Este fenómeno se manifestó en la huelga de 1998 —que culminó con un paro de medio millón de trabajadores— contra la venta de la compañía telefónica, y en la campaña que obligó a la administración Clinton a excarcelar a 11 presos políticos independentistas.

Los políticos capitalistas temen —y con razón— que, si bien la mayoría de los puer-

torriqueños no apoyan la independencia en la actualidad, la lucha para sacar a las fuerzas militares norteamericanas de Vieques ha brindado una oportunidad sin precedentes a aquellos que explican que la independencia del dominio colonial norteamericano es tanto necesaria como posible. Y le ha dado más fuerza a la clase trabajadora para luchar por sus intereses contra los patrones. De hecho, la lucha por la independencia de Puerto Rico contra el dominio norteamericano beneficia los intereses de la gran mayoría del pueblo de Estados Unidos también.

Hoy día el mejor ejemplo de una lucha exitosa por la soberanía nacional es Cuba revolucionaria, donde los trabajadores y campesinos derrocaron a la minoría adinerada gobernante, tomaron el poder y acabaron con la dominación norteamericana.

Durante más de 40 años el pueblo cubano y su gobierno revolucionario han rehusado ponerse de rodillas ante el imperio del norte. Han trazado un camino para construir una sociedad fundada en la solidaridad, la dignidad y la participación en luchas por la libertad a nivel mundial.

La creciente lucha nacional en Puerto Rico forma parte de la renovada resistencia de trabajadores y agricultores por toda América Latina —de Ecuador a Costa Rica— así como en Estados Unidos. Los que luchan contra la Marina yanqui en Puerto Rico y los militantes sindicales y agrícolas en Estados Unidos encontrarán fuerza común al vincular sus luchas.

¡Washington fuera de Vieques ya! ¡Ni una bomba más!

¡Independencia para Puerto Rico!

Trabajadores de la limpieza logran victoria en Los Angeles



CAROLE LESNICK PERSPECTIVA MUNDIAL

Tras una huelga de tres semanas, 2 mil trabajadores de la limpieza en Los Angeles, miembros del sindicato SEIU, ganaron un alza salarial de hasta 26 por ciento y cinco días pagados por ausencias.